

Centroamérica en el umbral de los noventa

Carlos M. Vilas

Centroamérica termina la década de 1980 e ingresa a la de 1990 en una situación asaz contradictoria. Por un lado, una crisis económica y social profunda que abarca todas las dimensiones y aspectos de la región, se hunde en el pasado y ofrece día a día nuevas y preocupantes expresiones. Por el otro, la progresiva consolidación de la democracia electoral y la paulatina desactivación de las manifestaciones más violentas del conflicto político que asoló durante toda la década a tres de los países del área, con repercusiones directas en los demás.

La situación es delicada. En el pasado reciente, la conjugación de crecimiento económico con opresión política abrió las puertas para el torrente revolucionario que sacudió a la región. Hoy, el avance de la democracia electoral remueve las dimensiones institucionales y políticas de la crisis revolucionaria, pero hasta el momento no ha podido desmontar sus bases socioeconómicas. La pobreza, la marginación social, la desarticulación de las sociedades son mayores que hace una década, y ello es así tanto en las sociedades que enfrentaron la crisis económica por la vía revolucionaria (Nicaragua), por la vía reformista (Costa Rica y Honduras), por la vía reformista (Guatemala y El Salvador).

Durante la década de 1980 la economía centroamericana retrocedió en términos *per cápita* casi 17%: más del doble de la pérdida de América Latina y el Caribe. El producto real por habitante de la región a fines de la década de 1980 era similar al de 15 años atrás. La inflación se aceleró; los precios al consumidor crecieron casi 257% en Costa Rica, 171% en El Salvador, 121% en Guatemala, 56% en Honduras y más de 37 000% en Nicaragua. La inversión interna se mantuvo estancada en Honduras y El Salvador, cayó más de 5% promedio por año en Guatemala y solamente creció en Costa Rica

(2.1% anual) y en Nicaragua (4% anual). El poder de compra de las exportaciones de El Salvador en 1989 era 61% menor que en 1981, el de las exportaciones de Guatemala 26% menor y el de las de Nicaragua 46% menor; el comercio intercentroamericano se redujo a la mitad. La deuda externa regional pasó de 9 mil 843 millones en 1981 a más de 20 mil millones en 1989; con una población de casi 25 millones, esto representa una deuda por habitante de 800 dólares, incluyendo a los recién nacidos.¹

Durante 1990 la cuestión política ha dado un paso al costado para devolver la centralidad a la problemática económica y social. Pero a menos que ésta encuentre una solución aceptable para los grupos sociales que protagonizaron las confrontaciones políticas recientes, la cuestión del poder volverá a ocupar el centro de la atención, y del drama regional.

Esta suma de elementos explica la importancia que la reunión de presidentes centroamericanos en Antigua (Guatemala, 15 a 17 de junio, 1990) asignó a los temas económicos y a la desmilitarización de la región. Esta fue la primera cumbre presidencial postsandinista, y dio por lo tanto la imagen de una homogeneidad ideológica que la región había perdido desde la década de 1970. Los presidentes tienen en claro la vulnerabilidad de la democracia electoral, y la de sus propios gobiernos, si no se encararan los problemas económicos y sociales de fondo y no se reduce la gravitación presupuestaria y político-institucional de los ejércitos de la región, asegurándose el control institucional de los aparatos militares y de seguridad.

1. CEPAL, *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1989*; Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo mundial 1989*, pp. 202-203.

COORDINACIÓN REGIONAL Y COOPERACIÓN EXTERNA

Los mandatarios centroamericanos acordaron en Antigua un Plan de Acción Económica de Centroamérica (PAECA) cuya nota dominante es la intención de crear un nuevo marco jurídico y operativo de la integración regional, a través del impulso a programas coordinados de construcción y reconstrucción de la infraestructura física; desmontar obstáculos al comercio intra-centroamericano; coordinar los esfuerzos de promoción del comercio extrarregional; los estudios conducentes a la incorporación al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) —proceso que se encuentra muy avanzado en Costa Rica— y la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe; establecer mecanismos de coordinación de los programas de ajuste macroeconómico, los esfuerzos de reconversión industrial y las políticas agrícolas. Los presidentes también resolvieron establecer un foro de consulta y coordinación en materia de deuda externa para encontrar soluciones apropiadas a la deuda bilateral o multilateral. Hicieron asimismo un llamado a la comunidad internacional para que contribuya a aliviar el peso de la deuda externa y liberar recursos financieros para el desarrollo de la región.

Guillermo Endara, que fue colocado como presidente de Panamá por la infantería de marina de Estados Unidos tras la invasión del 20 de diciembre de 1989, participó en Antigua como observador. Su presencia obedeció a la invitación que se formuló al gobierno de Panamá en la reunión presidencial de Montelimar (Nicaragua, abril de 1990) “a participar en forma activa en los procesos de diálogo, negociación y concertación”. La invitación, y la respuesta positiva de Panamá —imperiosamente necesitado de mejorar su imagen externa— expresan la intención del entonces presidente Óscar Arias, de Costa Rica, de ampliar el concepto de Centroamérica a toda la geografía regional (incluyendo eventualmente a Belice), al mismo tiempo que reducir la gravitación del grupo extrarregional de “Los Ocho” (Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela) disminuido a siete tras la salida de Panamá, en el tratamiento de los asuntos centroamericanos. La incorporación del gobierno panameño a las negociaciones centroamericanas en el mismo momento en que el Gru-

po de los Ocho ratificó su exclusión en la reunión de ciudad de México, indica claramente el desfase que se registra entre la nueva etapa que se abre en Centroamérica tras la caída del gobierno sandinista, y los actores de la etapa anterior. La declaración de los presidentes reiteró la invitación a Panamá “a participar en forma activa en los procesos de diálogo, negociación y concertación” y a su incorporación “como parte del proceso de integración económica centroamericana”.

La aprobación del PAECA representa una revalorización de la búsqueda de mecanismos concertados que deberá contrarrestar las tendencias centrífugas hacia negociaciones bilaterales emergentes de la incrementada diferenciación económica dentro de la región. El Salvador, Guatemala y Nicaragua se han convertido en exportadores netos de población, mientras que Costa Rica y Honduras han asumido el papel de importadores netos. Las diferencias intrarregionales en el proceso de urbanización eran 50% mayores al finalizar la década de 1980 que al comenzarla, casi otro tanto las diferencias en el producto por habitante, y un sexto más amplias las diferencias en el valor de la exportaciones. El proceso de diferenciación del sector exportador ha sido relativamente amplio en Honduras, algo menor en Costa Rica y Guatemala, y muy reducido en El Salvador y Nicaragua. El atractivo de una negociación colectiva en materia arancelaria es mayor para Nicaragua, Honduras y El Salvador que en Costa Rica y Guatemala; los gobiernos de estos dos países están más interesados en negociaciones bilaterales con actores extrarregionales que los otros tres.

Futuro indefinido enfrenta el Parlamento Centroamericano. Los nuevos gobiernos de Costa Rica y Nicaragua parecen poco entusiasmados, posiblemente porque la creación del Parlamento implica convocar a nuevas elecciones que significarían una confrontación de fuerzas con la oposición, de resultados impredecibles. Además, con la salida del sandinismo de la escena gubernamental regional, todo el esquema de Esquipulas —del que el Parlamento Centroamericano forma parte— se encuentra en (triumfal) retirada. Es posible que también la constitución del Parlamento dependa de la capacidad de los otros tres países de la región de convocar en su ayuda algún apoyo político extrarregional.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

La reactivación de la economía centroamericana involucra el desarrollo de la infraestructura económica y social —en particular todo lo referente a transporte y telecomunicaciones—, la revitalización de la inversión productiva, el desarrollo de los recursos humanos y la modernización del sector financiero. Centroamérica demanda capitales de inversión en una magnitud que varía de acuerdo a las diferentes propuestas, pero que en todo caso excede en lo inmediato la capacidad de los mecanismos e instituciones financieras de la región para manejarlos.

Hasta el momento existe un abismo profundo entre las declaraciones de la comunidad internacional en favor de la consolidación de las bases económicas de las democracias centroamericanas, y el desembolso efectivo de fondos. Cuesta pensar que la situación vaya a cambiar significativamente en el futuro. La comunidad internacional está mucho más entusiasmada con las perspectivas que se abren con la transición de Europa Central del socialismo al capitalismo, y con la constitución de grandes bloques político-económicos. Las negociaciones entre Estados Unidos y la URSS, y la propia crisis soviética, garantizan adicionalmente que Centroamérica ha dejado de ser una arena de competencia entre ambas superpotencias. En una región donde los estímulos económicos a la inversión foránea y a la cooperación en gran escala son usualmente escasos, los estímulos extraeconómicos van en camino de rápida desaparición. Las sumas desembolsadas por Estados Unidos a los gobiernos de Endara y Chamorro no guardan proporción con los daños de la invasión a Panamá ni de la guerra librada contra Nicaragua, y los compromisos de cooperación conseguidos por el nuevo gobierno de Nicaragua en la reunión de donantes de Roma representan un modesto 30% de sus requerimientos mínimos de ayuda.

La visita del secretario de Estado norteamericano a la reunión presidencial de Antigua, demostró que es poco, si algo, lo que por el momento Estados Unidos tiene para ofrecer a la reactivación económica de Centroamérica y a la construcción de las bases materiales de la democracia. James Baker propuso la creación de una instancia similar al "Grupo de los 24", encargado de coordinar la cooperación con los países centroeuropeos que están evolucionando

hacia el capitalismo. Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón actuarían como copresidentes, correspondiendo el secretariado también a Estados Unidos; podría invitarse a algún país latinoamericano (¿Venezuela?) a integrar la presidencia del grupo. Como contrapartida, los gobiernos de Centroamérica deberían comprometerse a promover reformas económicas por la vía tradicional de los instrumentos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y mediante la expansión del comercio y las inversiones así como la transferencia de tecnología. La falta de respuesta de los presidentes puede interpretarse como un resultado del carácter poco elaborado de la propuesta como también de la ausencia de una orientación clara respecto del papel que desempeñarían los gobiernos centroamericanos en el grupo cuya creación se sugiere, y a la desilusión de los que esperaban algún anuncio de ayuda concesionaria.

Similar vaguedad presenta hasta ahora la "Iniciativa para las Américas" formulada poco después por el presidente Bush, y ello también explica la falta casi general de respuestas en Centroamérica. La reacción más notable fue la del gobierno de Costa Rica, que apresuró su disposición a suscribir un acuerdo bilateral con Estados Unidos —en lo que se considera como una limitación potencial a la estrategia regional de rearticulación externa— disposición que contrasta con la cautela de las organizaciones empresariales del país. Sea como fuere, el estado primario en que se encuentra todavía la Iniciativa y su carácter de largo plazo, explican la fría actitud regional y sugieren la ausencia de una política articulada de Estados Unidos para una región que ya no es la de tres o cuatro años atrás y que necesita propuestas y soluciones en el corto plazo.

POCAS OPCIONES DE DESARROLLO

El acceso a cooperación abundante, de largo plazo y en condiciones blandas, es condición necesaria para que Centroamérica reemprenda el camino del desarrollo con bienestar social. Pero la experiencia muestra que siendo una condición necesaria, no es una condición suficiente, y debe conjugarse con la definición de estrategias económicas que transformen la ayuda en acumulación y desarrollo. En este sentido, no son muchas las opciones de desarrollo que apa-

recen abiertas para la región. El regreso al estilo de crecimiento de las décadas de 1950 a 1970 es imposible; las circunstancias extrarregionales que favorecieron el auge de entonces no existen hoy, y la desaceleración del crecimiento centroamericano era evidente ya antes del estallido de la crisis revolucionaria. El cierre de la economía regional y la búsqueda de estrategias sustitutivas de importaciones también resultan extemporáneas, y la dotación de recursos de la región y el tamaño reducido de sus mercados acotan el alcance de una industrialización sustitutiva. La experiencia con la promoción de exportaciones no tradicionales ha sido mucho más existosa en el nivel micro de empresas o sectores específicos, que en el nivel macro de las economías nacionales, mostrando por lo tanto reducido poder multiplicador.

El margen estrecho de opciones de desarrollo tiene que ver con las características estructurales de las economías centroamericanas y su creciente marginalidad en el mercado internacional. Entre 1970 y mediados de la década de 1980 la participación de las exportaciones de Centroamérica en el comercio internacional se redujo a la mitad respecto de las exportaciones de las economías en desarrollo, y a 60% respecto del total de exportaciones mundiales. Estas economías se ubican en la posición de tomadores de precios, es decir, carecen de capacidad de fijar los precios de los bienes que exportan a los mercados internacionales, los cuales están bajo la dominación de estructuras oligopólicas controladas por las economías desarrolladas. En estas condiciones, el crecimiento del ingreso y del producto dependen de: 1) crecimiento de los precios de exportación; 2) disminución de los precios de importación; 3) reducción de los costos de producción para la exportación. Los dos primeros factores están más allá de la capacidad de acción de las economías centroamericanas. En lo que respecta al tercer factor, los costos de producción se dividen en costos regionales y costos extrarregionales ("importados"). Una proporción alta de los insumos, maquinaria y equipo, etc., es de origen extrarregional, mientras que el principal costo local es la fuerza de trabajo. La competitividad extrarregional del factor trabajo es en definitiva la condición de rentabilidad del sector exportador y, a través de éste, del conjunto de la economía regional.

Esto plantea a las economías centroamerica-

nas un doble problema. El primero se refiere al carácter del sector exportador en Centroamérica. Dada la diferenciación marcada entre el sector productor de exportables y el sector que produce para el mercado doméstico, incrementos en la productividad del sector exportador no tienen en principio impacto sobre el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. La rentabilidad externa reposa en definitiva en una compresión absoluta de las condiciones de empleo y de vida de los productores directos —asalariados y campesinos— agravada por el carácter usualmente estacional del empleo en el sector exportador. En economías de este tipo el mercado interno tiene dimensiones reducidas y elevados coeficientes de importación, ya que esas dimensiones inhiben el desarrollo de un sector industrial que no esté estrictamente ligado a la exportación —y en todo caso de alcances muy limitados. El esquema exportador es, al mismo tiempo, un esquema importador de gran vulnerabilidad externa, marcada polarización de los ingresos, el poder y la cultura, y modalidades institucionales usualmente muy autoritarias.

El segundo problema es que estos rasgos estructurales reducen las perspectivas de reactivación y rearticulación externa, en la medida que los procesos de dinamización exportadora y de reconversión industrial, y las líneas más dinámicas del desarrollo internacional, se apoyan en inversiones intensivas en tecnología, y no en inversiones orientadas a un uso extensivo de la fuerza de trabajo. La disponibilidad de mano de obra abundante y barata es hoy un atractivo mucho menos relevante para la inversión de capital productivo, que la dotación de una infraestructura adecuada, la calificación de la fuerza de trabajo, el nivel de protección arancelaria efectiva, el costo del crédito y el acceso a mercados solventes.

A pesar de la tendencia del debate político-económico de la década pasada a la polarización y a cierto ideologismo, es posible prever que estas características forzarán a la búsqueda de opciones que algunos juzgarán ambivalentes, otros contradictorias, y los más simplemente como pragmáticas. Por ejemplo, la reducción de la intervención microeconómica directa del Estado mediante la privatización de empresas públicas, con la agilización y elevación de la eficacia de su intervención macroeconómica indirecta; la conjugación de un crecimiento que potencie las po-

sibilidades exportadoras de la región, con las virtualidades de la reactivación de las condiciones de vida de los centroamericanos como ingrediente de desarrollo sobre la base de la consolidación del mercado regional; la promoción de exportaciones no tradicionales y la modernización del sector exportador tradicional, al mismo tiempo que la promoción de una mayor integración intersectorial de las economías domésticas y la búsqueda y consolidación de mecanismos de coordinación e integración regional; la incorporación de nuevas tecnologías al mismo tiempo que el apoyo a tecnologías adaptadas a la dotación de factores locales; la búsqueda de mercados extrarregionales junto con el fortalecimiento del mercado regional.

Este último punto es clave. El desarrollo de Centroamérica estuvo siempre ligado al acceso a mercados extrarregionales: Europa primero, Estados Unidos más tarde. La experiencia del Mercado Común en la década de 1960 fue complementaria de la articulación regional al mercado norteamericano, y no una alternativa a ella. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) fue encarada por el gobierno norteamericano como una estrategia de mejorar las condiciones de acceso al mercado de ese país a cambio de la adopción de determinadas políticas económicas y financieras. Nicaragua, que fue excluida de ese programa y posteriormente fue afectada por el embargo comercial norteamericano, buscó en una reorientación de su comercio hacia el bloque socialista formas de redefinición de su articulación externa que potenciaran sus esfuerzos de transformación social. Hoy, el bloque socialista ya no existe, el signo político del gobierno nicaragüense es otro, y la experiencia con la ICC dista mucho de haber satisfecho las expectativas de los centroamericanos.

El acceso a mercados extrarregionales se mantiene como una de las cuestiones de más difícil solución y el talón de Aquiles de las estrategias exportadoras. Las barreras existentes a las exportaciones centroamericanas, y en general de las economías periféricas, no obedecen principalmente a cuestiones institucionales —proteccionismo, por ejemplo— que podrían ser eliminadas por actos de decisión política, sino a la brecha tecnológica creciente que las separa del mundo desarrollado, y a la rápida saturación de los mercados para las nuevas exportaciones agrícolas —con excepción de los si-

cotrópicos— por la propia competencia entre exportadores.

¿CRECIMIENTO Y DEMOCRACIA O CRECIMIENTO VS DEMOCRACIA?

Las características estructurales de las sociedades centroamericanas hacen difícil o en todo caso muy costosa la compatibilización de una reactivación económica —incluyendo una reinserción externa— con la estabilidad democrática. El sistema político es el ámbito en que la sociedad plantea y eventualmente resuelve sus conflictos. A pesar de los avances institucionales, el contenido de gran parte de los conflictos sociales en Centroamérica refleja la existencia de posiciones polarizadas que hacen difícil las transacciones de intereses. En cierto momento las demandas laborales entran en conflicto con las perspectivas de acumulación, en la medida que el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, que siguen siendo pésimas, implica la elevación de los costos de producción y por lo tanto la reducción de la rentabilidad del capital y de la competitividad externa en sectores que siguen siendo vitales para la economía centroamericana —en primer lugar, las exportaciones tradicionales. Las demandas de participación y competitividad política plantean la hipótesis de la pérdida del poder de los grupos dominantes tradicionales o modernizantes, y la transformación de proyectos sociales y económicos alternativos en políticas del Estado. La "puesta a punto" de la infraestructura económica y social para apostar a una reconversión económica y a una reinserción externa implican la adopción de políticas de gasto público que, en defecto de financiamiento externo, presionarán sobre los grupos empresariales con mayor capacidad de tributación y mayor capacidad de bloqueo a esas políticas.

Si dejamos de lado a Costa Rica, la consolidación de la democracia electoral en Centroamérica se debe tanto a la movilización política interna como a un proceso regional de negociación en el que las fuerzas extrarregionales han desempeñado un papel vital. Los gobiernos de Estados Unidos y Europa Occidental que intervinieron en el asunto se aproximaron a la democracia electoral ante todo como una alternativa que habría de deslegitimar a la vía revolucionaria. Si la revo-

lución centroamericana era el resultado de que las dictaduras militares y los regímenes autoritarios habían cerrado el paso a la protesta legítima de los grupos sociales afectados negativamente por la modernización capitalista, desmontar las dictaduras era volver a abrir el sistema político a las demandas de la gente. Una estrategia que antagonizó a los elementos más retardatarios de las sociedades de la región, pero que al mismo tiempo sorprendió a las opciones revolucionarias en Guatemala y El Salvador. En Nicaragua, donde en 1984 el FSLN había convocado a elecciones generales, la estrategia consistió en cuestionar la honestidad de esos comicios, continuar el desgaste del régimen sandinista a través de la guerra contrarrevolucionaria y el embargo comercial y financiero, y denunciar anticipadamente el carácter deshonesto de las elecciones de 1990, cuya única prueba admisible de legitimidad sería la derrota del sandinismo.

Existen por lo tanto dos formas básicas de encarar la democracia electoral. Para las víctimas de los regímenes autoritarios y para los grupos emergentes significa la (re)apertura del espacio institucional para resolver o al menos procesar los problemas sustantivos de las sociedades de la región y de segmentos importantes de sus poblaciones. Para los grupos establecidos, significa desmontar una de las bases efectivas de la convocatoria de las organizaciones revolucionarias y de hecho restarle legitimidad a la convocatoria misma, aislando a sus partidarios.

Se comprende por lo tanto la fragilidad de una democracia a la que es posible aproximarse con perspectivas tan diferentes. Si en Costa Rica y en Honduras el sistema electoral expresa la existencia de un consenso en torno a un conjunto de temas fundamentales y al modo de encararlos —más sólido en Costa Rica que en Honduras—, cosas muy distintas ocurren en los otros tres países de la región. En Guatemala y El Salvador la estabilidad del régimen político depende ante todo del desenvolvimiento de los respectivos procesos de negociación, y de las garantías efectivas que las fuerzas establecidas brinden a las organizaciones revolucionarias de una inserción eficaz en el sistema político, esto es, de que sus miembros y simpatizantes no correrán una suerte similar a la de los de la Unión Patriótica y el M-19 en Colombia. En Nicaragua el sistema político se ha convertido después de las últimas elecciones en la arena de enfrentamiento entre

la supervivencia del proyecto revolucionario y la voluntad de liquidarlo del nuevo gobierno.

La consolidación de los procedimientos electorales dio nuevo vigor a los partidos políticos que, salvo en Costa Rica y Honduras, habían sido relegados a posiciones marginales en el escenario político que se configuró con la crisis, los regímenes militares y las tensiones revolucionarias. Hasta el momento sin embargo los partidos —viejos, nuevos y renovados— no han podido superar su papel tradicional de agencias electorales y de atención a clientelas locales, en la medida que la centralización de las decisiones más importantes en el Poder Ejecutivo convierte a las cámaras legislativas en poco más que cajas de resonancia de las iniciativas presidenciales.

Las organizaciones sindicales y populares en Honduras, Guatemala y El Salvador, duramente golpeadas por diversos grados de represión durante la década de 1980, se encuentran en proceso de progresiva recomposición, beneficiadas por la relativa apertura del espacio institucional y estimuladas por el incesante deterioro de la situación social. En Nicaragua, donde en el curso del periodo sandinista las organizaciones populares se convirtieron en aparatos del Estado y agencias de trasmisión de las directivas gubernamentales, las huelgas y protestas populares de mayo y julio de 1990, y la autonomía organizativa y reivindicativa de los trabajadores sorprendieron al nuevo gobierno y ahondaron sus divisiones internas. En los cuatro países, aunque de manera diferente en unos y otros, el movimiento popular y sindical se encuentra atravesando procesos de reorientación y recomposición, que resultan tanto de las historias recientes de los respectivos movimientos como de los reacomodos que tienen lugar en las diferentes sociedades nacionales, y contrastan con la estabilidad y la inserción institucional del movimiento popular en Costa Rica.

El autoritarismo tradicional de las sociedades centroamericanas tiene sus raíces en la configuración estructural de esas sociedades y no en el carácter de los centroamericanos. Las perspectivas de democracias firmes y estables en la región dependen de la capacidad de estas sociedades de introducir transformaciones en esas estructuras, o por lo menos de aceptar la legitimidad del debate y de las luchas por estas reformas en el marco de un sistema político efectivamente competitivo. Pero esas reformas, incluso si

son concebidas en perspectiva técnica, entran en colisión con la intransigencia de los grupos de poder económico en un conflicto que se proyecta al terreno político institucional donde la intransigencia de los poderosos pone en tela de juicio la estabilidad democrática. Al contrario, la reproducción de los rasgos estructurales presentes profundiza la insatisfacción de amplios sectores de población con sus condiciones actuales de vida y con el sistema político si éste se prueba ineficaz para mejorar las cosas. Los entusiastas del carácter ejemplar de la democracia costarricense harían bien en repasar la historia, inicialmente muy conflictiva, de las transformaciones sociales y económicas que abonaron la construcción de su sistema político, como también deberían incluir en sus análisis los más de mil 200 millones aportados por el Tesoro estadounidense a ese país en la década de 1980.

DESMILITARIZACIÓN Y NARCOECONOMÍA

Diez años de guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria han alimentado un proceso de amplia militarización difícil de desmontar. En una región tradicionalmente vulnerable al fenómeno del militarismo, la relevancia de la función militar para la defensa del orden establecido y las estrechas vinculaciones entre los aparatos militares centroamericanos y el gobierno de Estados Unidos, abonaron el terreno para la primacía política de las fuerzas armadas. El avance político de los aparatos militares fue acompañado de incursiones en el mundo de los negocios. Si en sus primeros momentos éstas fueron enfocadas como fenómenos de corrupción y patrimonialismo, tradicionales en la región, posteriormente llegaron a convertir a los ejércitos en fuerzas económicas con intereses y raíces relativamente autónomas respecto de otras fracciones de las burguesías domésticas.²

La incorporación de Centroamérica a la red del tráfico internacional de estupefacientes tiene también que ver con esta rápida conversión de

ciertos militares centroamericanos en fuerzas económicas de primer orden. Por lo menos desde la década de 1970 Centroamérica es un eslabón estratégico en las rutas de comercialización de los enervantes producidos en Sudamérica hacia el mercado expansivo y solvente de Estados Unidos. En los últimos años ha surgido evidencia del involucramiento de oficiales de las fuerzas armadas y funcionarios de algunos gobiernos centroamericanos, así como de la "Resistencia Nicaragüense" en actividades de narcotráfico, en algunos casos con participación de agencias del gobierno de Estados Unidos. Por su propia naturaleza clandestina, el tráfico de estupefacientes involucra el control de los espacios aéreos, de las aduanas, puertos y aeropuertos, de las rutas marítimas y las costas. Es decir, actividades que en todos los países del mundo corresponden a las fuerzas armadas o a cuerpos subordinados a ellas.³

En la medida que el acceso a estas fuentes de acumulación de poder económico y político dependen del manejo directo de recursos del Estado, se entienden las resistencias de los ejércitos centroamericanos a asumir funciones más convencionales y específicas. Los procesos de democratización y el avance del control civil pueden ser vistos como amenazas no sólo en términos ideológicos —el avance de la subversión y el comunismo— sino por razones mucho más concretas referidas a lo que se ha convertido en un *modus vivendi* y en una base efectiva de poder.

En años recientes Centroamérica ingresó directamente en la narcoagricultura. En 1987 Guatemala se había convertido en uno de los

2. Sobre Guatemala véase James Dunkerley, *Power in the Isthmus*, Londres, Verso, 1988, capítulo 9; sobre El Salvador véase Joel Millman, "En El Salvador la corrupción no tiene rival, "tras 10 años de guerra", *Excelsior*, México, 9 de julio, 1990.

3. Véase por ejemplo Jonathan Marshall *et al.*, *The Iran Contra Connection*, Boston, South End Press, 1987; Christopher Dickey, *With the Contras*, Nueva York, Simon & Schuster, 1985; Holly Sklar, *Washington's War on Nicaragua*, Boston, South End Press, 1988; Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, *Informe de la Comisión sobre el Narcotráfico*, San José, Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 1989, y *Segundo Informe de la Comisión sobre el Narcotráfico*, San José, Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 1989. Las revelaciones del gobierno cubano sobre el involucramiento de oficiales del ejército y organismos de seguridad de ese país en actividades de narcotráfico ofrecen información sobre el *modus operandi* que es válido para otros países también: *Causa 1/89. Fin de la conexión cubana*, La Habana, Editorial José Martí, 1989.

diez mayores productores mundiales de marihuana, e iba en camino de otro tanto en la producción de amapola. Vastas superficies de los departamentos San Marcos y Huehuetenango están dedicadas al cultivo de la amapola, y de la marihuana en el Petén. En 1985 se cultivaban unas 225 hectáreas de marihuana, incrementándose a casi mil 600 en 1989; este año Guatemala figuró como el séptimo centro mundial del narcotráfico. En Nicaragua se ha sugerido que la narcoagricultura será en los hechos una de las actividades a desarrollar por los contras desmovilizados en los "polos de desarrollo" asignados por el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno ha reconocido un marcado incremento del tráfico de drogas en el país en los meses recientes.⁴

Las dificultades de los envíos de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos y los operativos del gobierno mexicano en su propio territorio, además de la alta rentabilidad de los cultivos, forzaron el desplazamiento al sur de los cultivos; en Centroamérica, las características técnicas de los cultivos —facilidad de manejo, resistencia a las plagas, etc.— crean condiciones propicias para los cambios en los usos del suelo, en un contexto de políticas agrícolas neoliberales que reducen la rentabilidad de la producción tradicional de granos básicos. Se estima por ejemplo que en Guatemala una *cuerda* (unos 460 m²) de amapola reportaba en 1988 al agricultor unos 20 mil quetzales (unos 4 mil 500 dólares), varias veces más que el ingreso anual de un productor de maíz o frijoles. El auge de la producción de psicotrópicos está generando el surgimiento de grupos sociales diferenciados, con gran capacidad para competir con los grupos dominantes tradicionales en materia de propiedad de la tierra, capital dinero y gravitación política. Al mismo tiempo, la expansión de la narcoagricultura altera las bases sociales de las organizaciones políticas que operan en las áreas rurales afectadas por estos cambios en el uso de los suelos, y les plantea problemas de difícil solución.

Por su lado, el avance de la desmilitarización en Guatemala y El Salvador, y la desarticulación

de los grupos parapoliciales, "escuadrones de la muerte" y similares, pueden arrojar sobre ambas sociedades el espectro de la autonomización de esos grupos y su dedicación a la delincuencia común: secuestros extorsivos, asaltos, violaciones, aprovechando la capacidad operativa instalada, la mano de obra ociosa y el *know how* adquirido durante los años en que tales prácticas formaban parte del comportamiento institucional del Estado. Una situación que se presentó en Argentina en las postrimerías del último régimen militar y en los años iniciales del gobierno constitucional que le sucedió, y que ya se está registrando en Guatemala.

CONSIDERACIONES FINALES

Este conjunto de factores, y los que hemos discutido en las secciones anteriores, señalan las muchas ambigüedades y tensiones y la multiplicidad de matices que tiñen el panorama de Centroamérica en los momentos actuales y en el futuro inmediato.

En el terreno de la economía, la vaguedad y limitaciones de los anuncios de Baker y Bush sugieren que en la etapa que se inicia el gobierno de Estados Unidos tiene propuestas muy genéricas y de largo plazo, pero pocas ideas concretas para el corto plazo, y aun menos disponibilidad de fondos. Los dirigentes políticos y empresariales de Centroamérica muestran consenso en el sentido de que los años del acceso amplio a recursos de ayuda están llegando a su fin. La cuestión es cómo sustituirlos, en una región cuyas alternativas de producción y de comercio son tan estrechas. Aunque sea por descarte, la idea de alguna forma de cooperación y coordinación regional vuelve a hacerse presente. Entre tanto, y en un nivel más popular, la migración ilegal hacia Estados Unidos, las remesas de familiares canjeadas en el mercado negro, y la narcoeconomía, continuarán presentándose como fuentes de empleo y de ingresos para cantidades crecientes de población. En la medida en que los mercados se cierran, cada vez más centroamericanos se verán orillados a ganarse la vida al margen de la ley.

Los problemas de la polarización creciente entre pobreza y riqueza se ven agravados por la violencia racial y la opresión sexista, y no hay

4. Carlos M. Vilas, "Nicaragua: El futuro de la contra", *El Día Latinoamericano*, núm. 6, 2 de julio, 1990, p. 4; declaraciones del ministro de Gobernación en *El Día*, México, 25 de julio, 1990.

muchos indicios de solución a estas cuestiones en los años venideros. Si el subdesarrollo económico es difícil de superar, el desmontaje de estos aspectos profundamente arraigados en las estructuras sociales es mucho más lento y complicado, exacerbados ahora por la desarticulación general de las sociedades de la región. El énfasis de la retórica oficial en la pacificación, la reconciliación y la democratización no pueden opacar el escaso desarrollo de una cultura cívica nacional, y por lo tanto de valores sociales e institucionales compartidos. Cosas difíciles de alcanzar con tensiones y cortes tan profundos, que se hacen más notorios e irritantes por las reducidas dimensiones de las sociedades respectivas, y por el mantenimiento de estructuras y estilos de jerarquización social en los que los grupos que controlan el poder, la educación y la riqueza siguen actuando como conquistadores, más que como dirigentes.

Por razones muy específicas Centroamérica se convirtió en la década de 1980 en uno de los focos de la atención internacional y en el centro de la política latinoamericana de Estados Unidos. Esta notoriedad, que trajo beneficios para algunos y miserias y calamidades para otros, está desvaneciéndose, aunque sus efectos en uno y otro sentido perdurarán por un largo trecho

—sobre todo los segundos. De todos modos es indiscutible que en la década de 1990 Centroamérica regresará a un perfil internacional bajo, más acorde con lo que ha sido la tradición de la región a lo largo del siglo xx. El modo en que está procesándose la crisis centroamericana, el desenvolvimiento de la crisis en Europa Central y en la URSS, y el apoyo soviético a las iniciativas de Washington en la región, sugieren asimismo que en la década que se inicia Centroamérica regresará a otro de sus patrones tradicionales: el ámbito territorial de la *pax americana*, que vuelve a englobar, como a principios de siglo, a toda la Cuenca del Caribe —con la sola excepción de Cuba.

El futuro que se avecina se parece mucho por lo tanto al pasado, y la modernidad coincide alarmantemente con el primitivismo. El panorama que asoma ante nuestros ojos resume muchos de los aspectos de la sociedad centroamericana contra los que los centroamericanos han venido luchando durante toda su historia. Por eso mismo, y a menos que se piense que existe una vocación colectiva al masoquismo o al suicidio, habrá que admitir que continuará en Centroamérica la búsqueda de vías que conduzcan al desarrollo y la justicia social.